

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022)**

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 del Decreto 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por GERARDO MUÑOZ GARCÉS y MILADYS LEÓN GARCÉS contra la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., siendo vinculada como interviniente excluyente ISADORA PADILLA TORRES (fl. 146) (Radicado 05001-31-05-017-2019-00193-01).

**ANTECEDENTES**

Pretenden los demandantes se condene a Porvenir S.A. al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hijo Rovis Muñoz León a partir del 22 de enero de 2012, con los correspondientes intereses de mora que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas procesales.

Como fundamento a sus pretensiones narraron que Rovis Muñoz León falleció por inmersión en el río León el día 22 de enero de 2012, para cuando contaba con 71.85 semanas de cotización como afiliado a Porvenir S.A.; elevaron solicitud de pensión de sobrevivientes, prestación que fue negada por comunicación del 27 de noviembre de 2013, con manifestación de existir

persona que aduce convivió con el causante los últimos dos años, a la espera de determinar el vínculo y el tiempo de convivencia; se elevó nueva petición para obtener pronunciamiento, obteniendo reiteración de lo ya enunciado; el 21 de noviembre de 2016 Porvenir se abstiene de resolver de fondo por existencia de otro beneficiario de igual o mejor derecho, pese a que Isadora Padilla Torres no tuvo la calidad de compañera permanente del fallecido.

PORVENIR S.A dio respuesta al líbello dando razón a los hechos referidos al fallecimiento, la calidad de afiliado del causante y de padres del mismo de los demandantes, pero se alude a la existencia de una controversia de beneficiarios que se remitió para ser atendida por la justicia ordinaria. Como medios de oposición propuso las excepciones de mérito que denominó: Falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, prescripción, hecho exclusivo de un tercero y buena fe.

Mediante auto del 03 de abril de 2017 se dispuso vincular a la litis a la señora ISADORA PADILLA TORRES en su calidad de compañera permanente como interviniente excluyente (fl. 146), quien promovió demanda arguyendo los siguientes fundamentos fácticos: En el año 2006 inició una relación marital de hecho con Rovis Muñoz León, con quien convivió de manera ininterrumpida hasta el 22 de enero de 2012 cuando ocurrió su muerte; éste no contrajo matrimonio, no convivió con persona diferente ni tuvo hijos; señaló que pese a vivir en la casa de su madre, era Rovis Muñoz quien respondía por su sostenimiento y manutención. Se presentó ante Porvenir S.A a reclamar el derecho pensional por la muerte de su compañero, trámite en el que le fue solicitada sentencia con declaración de la unión marital de hecho, proceso que inició y terminó por sentencia emitida el 30 de enero 2020 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó. Bajo tales supuestos, solicita el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en un 100% o subsidiariamente, de manera compartida con quienes fungen como sus padres.

Porvenir S.A se pronunció, sin oposición ni allanamiento a las pretensiones, aduciendo no constarle la convivencia alegada. Formuló como medios de defensa los mismos expuestos frente a la demanda principal.

GERARDO MUÑOZ GARCÉS y MILADYS LEÓN GARCÉS dieron respuesta a la demanda de la interviniente en la que se oponen a la convivencia aducida por Isadora Padilla por tener su hijo a la fecha de la muerte calidad de soltero, quien vivía con sus padres y aportaba económicamente para la manutención. Propuso como excepción de fondo la de prescripción.

El 18 de agosto de 2021 el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia en la que ABSOLVIÓ a la demandada de todas las súplicas sin imposición de costas.

Argumentó en síntesis la Juez de Instancia no encontrar acreditada una convivencia por el término de 5 años anteriores a la muerte entre el causante e Isadora Padilla Torres. Y frente a los padres, consideró no ser probada de forma suficiente la dependencia económica conforme a los parámetros de la sentencia C111-2006 y la CSJ SL1704-2021 para hacerse beneficiarios de la prestación.

La Sala en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ante la ausencia de recursos interpuestos por los vencidos en juicio, conoce del asunto por el grado de consulta en favor de los demandantes, entendiéndose también la interviniente excluyente.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

No es tema de discusión al interior del plenario que Rosis Muñoz León falleció el 22 de enero de 2012 (fl. 28), dejando causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, en razón de haber cotizado dentro de los 3 años anteriores a la muerte 71.85 semanas conforme se desprende de la relación de aportes expedida por Porvenir S.A. (fls. 30-32).

De cara a lo anterior, y atendiendo el conocimiento del proceso por el grado de consulta, el problema jurídico a resolver por esta Sala de Decisión se circunscribe a establecer, si contrario a lo resuelto por la *a quo*, alguno de los solicitantes acreditó en debida forma el requisito de ley que los haga beneficiarios de la pensión de sobrevivientes perseguida en razón al óbito del afiliado Rovis Muñoz León acaecido el 22 de enero de 2012, sea Isadora Padilla Torres en su calidad de compañera permanente, o Gerardo Muñoz Garcés y Miladys Garcés como padres del fallecido. Definida esa situación jurídica, si es del caso, se analizará la procedencia de imponer el pago de los intereses moratorios o la indexación y costas procesales.

Pues bien, para resolver el asunto se tiene que la normatividad aplicable acorde a la teoría del hecho causante es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada, por lo que al haber ocurrido el deceso del afiliado el 22 de enero de 2012, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que señala los beneficiarios de la prestación, indicando textualmente lo siguiente de cara al tema:

*“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;*

*b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).*

*... d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.”*

Así, para la cónyuge o compañera permanente que pretenda ser beneficiaria de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de 5 años con el causante, independientemente de que sea un afiliado o un pensionado, en concordancia con lo definido por la SU 149 de 2021, que se opuso a la postura jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- que determinó como verdadero alcance del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003 a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, *in dubio pro operario*, que el tiempo de convivencia mínima de cinco (5) años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado (Ver SL1730-2020 reiterada en SL3843-2020, SL3785-2020, SL4606-2020, SL489-2021, SL362-2021, SL1905-2021, SL2222-2021 y SL5270-2021); con el argumento de violar tal decisión directamente los principios de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional sin justificación objetiva, y no armonizar con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia.

Para el caso de los padres, su derecho resultará excluyente en el evento de probarse la presencia de cónyuge o compañera permanente en la vida del fallecido con derecho a acceder a la prestación, pero en el evento contrario, necesariamente debe demostrar una dependencia económica respecto del causante y probar la imposibilidad de auto sostenimiento, es decir que, sin el aporte del fallecido, no podía ni podría procurarse una vida digna (Ver SL1604-2022). Pero en voces de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral la colaboración regular y simple no es suficiente para predicar la aludida dependencia, ya que la ayuda debe tener una connotación relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de los padres, y en el mismo sentido, se ha señalado que ese concepto legal de dependencia supera la simple subsistencia, pues se trata de garantizar unas condiciones dignas de vida (Ver SL1804-2018, SL4217-2018 y SL1386-2022), de modo que, la mera presencia de un auxilio o ayuda monetaria del “*buen hijo*” no siempre es indicativo de una verdadera dependencia económica y, en esta eventualidad, no se cumplirían las previsiones señaladas en la ley.

A más de ello, como bien fue expuesto por la falladora de instancia, la Alta Corporación en nuestra especialidad ha establecido unos parámetros para

determinar la dependencia económica, donde ha dispuesto que son: i) Debe ser cierta y no presunta, ii) La participación debe ser regular y periódica y iii) Las contribuciones deben ser significativas respecto del total de ingresos del beneficiario (Ver además de la SL1704-2021 enunciada en la providencia consultada, la SL5605-2019, SL1969-2021 y SL5648-2021).

En tales contextos, debe brotar del acervo probatorio en primera medida que existió con Isadora Padilla Torres y el difunto Rovis Muñoz León una convivencia ininterrumpida y permanente de por lo menos 5 años anteriores a su muerte, entendida esta como la *“comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado”* ( Ver SL3813-2020 y SL5540-2021 que traen a colación la SL1399-2018).

Al respecto, se cuenta con el acta de sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó el día 30 de enero de 2020 (Pág. 5 Archivo 16), cuyo documento original remitido por la aludida dependencia judicial obra en el archivo 24, a partir de la cual se extrae una unión marital de hecho surgida entre Rovis Muñoz León e Isadora Padilla Torres desde octubre de 2008 y hasta el 22 de enero de 2012 cuando se presentó el evento desafortunado.

Haberse declarado la existencia de la unión marital de hecho no impide que el juez laboral verifique dentro del proceso la real y efectiva convivencia entre la pareja (Ver SL1744-2021), pues se ha exhibido la independencia del criterio de convivencia respecto a la noción de *“unión marital de hecho”* que en el campo civil contempla la Ley 54 de 1990, pues debe centrarse la atención en esta oportunidad, es en la existencia y permanencia del vínculo como grupo familiar conformado, en por lo menos los últimos 5 años de vida del afiliado, encontrando de las declaraciones extrajuicio de folios 38 y 123, así como de la información suministrada al momento de llevarse a cabo la investigación administrativa de parte del fondo demandado a través de un tercero (fls. 124-

127 y 133-138) que Isadora Padilla definió como data inicial de la unión marital de hecho el 07 de octubre de 2009.

Ya en virtud a la confesión proveniente de la misma solicitante al absolver su interrogatorio de parte como medio de prueba idóneo regulado en el artículo 191 del CGP sin vestigio que contenga información distinta arribada, se tiene que la sentencia emitida por la especialidad de familia determinó iguales extremos temporales en que se desarrolló la unión, que los enfatizados en este trámite judicial por la interviniente al indicar que el inicio de la cohabitación como compañeros bajo mismo techo, lecho y mesa con Rovis Muñoz se dio desde el 08 de octubre de 2008 cuando regresó de prestar servicio militar, y de forma ininterrumpida hasta el año 2012 cuando se presentó el infortunio, lo que da lugar a definir una convivencia por el término de 3 años, 3 meses y 14 días, con los que no se niega la relación de pareja que existió entre esta demandante y el afiliado fallecido que por demás se concretó en sede judicial sin lugar a oposición, pero imposibilita en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 constituirse como beneficiaria de la prestación por muerte contemplada por el Sistema, por insatisfacción de las exigencias enlistadas en su calidad de compañera permanente, pues es claro y patente que no se cumplen los 5 años de convivencia previos a la muerte del señor Muñoz León.

Ahora, excluida esta posibilidad, es prudente analizar el derecho perseguido por los padres del fallecido, cuyo vínculo se encuentra acreditado con el Registro Civil de Nacimiento (fl. 26), restando por determinar la dependencia económica rituada en el marco de las condiciones y elementos fijados por la jurisprudencia.

Para ese fin, los promotores de la acción judicial allegaron como prueba testimonial los dichos de MARLENY DEL SOCORRO PANIAGUA y MANUEL ROBERTO MUÑOZ GARCÉS, vecina y hermano del demandante respectivamente. Ambos testigos en el punto concreto que nos ocupa la atención, señalaron conocer de una ayuda brindada por Rovis Muñoz a sus padres, con desconocimiento de condiciones de tiempo y cuantía de la misma. Específicamente la señora Paniagua advirtió que Rovis “mantenía a sus padres” y que conocía que cada ocho días llegaba a entregarles dinero que

destinaban a comprar comida, lo que conoció por observar en su calidad de vecina que cuando llegaba salían a comprarla, señalando que Ismael otro hijo de la pareja, también les brindaba apoyo económico, sin posibilidad de determinar la proporción de ellas. Manuel Roberto Muñoz indicó desconocer el valor y frecuencia de la ayuda, además de la intervención en este aspecto de parte de los demás hijos de su hermano, por no constarle esa situación de forma directa en razón de no visitar el hogar de Gerardo ubicado en Apartadó.

De esta probanza testimonial no es dable establecer las condiciones precisas de la pareja demandante que permita asentar que frente a su hijo fallecido existiera una subordinación económica al punto de inferir que la ausencia de la ayuda que en efecto les brindaba pues así también lo dejó ver Isadora Padilla Torres, implicara la falta de autosuficiencia económica a partir de recursos propios o de terceros, no siendo determinable la frecuencia ni el valor que den paso a darle el calificativo de significativo y relevante al aporte además de regular y periódico, pues debe destacarse que el afiliado conforme se desprende de la relación de aportes (fls. 30-32) devengaba un salario mínimo legal mensual vigente o incluso menos, que para el año 2012 ascendía a \$566.700 sin que exista otro medio que de cuenta que se haya dado un reporte por valor inferior al realmente devengado, surgiendo incomprensible que bajo esta remuneración, Rovis Muñoz cubriera su manutención en municipio distinto al de sus padres donde tenía su lugar de trabajo, y al mismo tiempo, brindara una ayuda definida por estos en los interrogatorios de parte por la suma de \$600.000 mensuales que equivalen incluso a una suma mayor a la devengada.

No debe pasarse por alto, la evidente ambigüedad que se presenta en el dicho de los padres solicitantes al momento de determinar el hito de esta decisión en lo que a ellos respecta, en tanto es disímil la versión no solo en lo que atañe a los ingresos de su hijo, sino lo que se refiere a su lugar de residencia en Chigorodó con lo que pretenden derruir la existencia de una pareja en la vida del afiliado donde se aduce también ofrecía recursos para los gastos del hogar, pues aseguraron que en aquel municipio se radicaba en la casa de un tío, mismo que compareció como testigo y dio cuenta que solo iba de visita,



pasando entre 8 o 10 días sin saber de él, sugiriendo la posibilidad de quedarse con quien luego supo era su novia - Isadora Padilla-. También es desatinado que la pareja demandante asigne en cabeza de Rovi la responsabilidad económica de la que pendía sus condiciones de dignidad pese a contar con un negocio propio de fritos, tener la intervención del estado otorgando una ayuda humanitaria de \$600.000 a \$900.000 y tener otros seis hijos de los cuales, 3 eran mayores de edad, recibiendo de otro de ellos - Ismael- también una ayuda que tampoco se determinó.

Bajo tal contexto, no es posible razonar si los ingresos que percibían los padres eran suficientes para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento básico, ni que el apoyo o ayuda -así sea parcial- del hijo fallecido fuera determinante para llevar una vida en condiciones dignas, pues al no ser cualquier ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, la que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sin que se tenga la posibilidad probatoria de establecer en este particular el tipo de aporte ofrecido, no es posible dar lugar a la connotación de haber sido la otorgada relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, con la que se cumpliría la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, y es que aquella sirva de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les ayudaba a mantener unas condiciones de vida determinadas.

Luego, ante la indeterminación de los ingresos de los padres solicitantes y la imposibilidad de establecer lo indispensable del aporte del causante para mantener el mínimo existencial que les permitiera a los padres subsistir de manera digna, no es dable dar por acreditada la dependencia económica y por tanto, no se configura el presupuesto legal para obtener la pensión, reflexiones que conllevan a confirmar de manera íntegra la providencia revisada.

En esta instancia no se causaron costas procesales, dado que se conoce del proceso por el grado de consulta.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia consultada, de fecha y procedencia indicadas.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310501720190019301</b>
<b>Proceso:</b>	<b>Ordinario</b>
<b>Demandante:</b>	<b>GERARDO MUÑOZ GARCES</b>
<b>Demandado:</b>	<b>A.F.P. PORVENR S.A.</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>26/08/2022</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 29/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

Secretario